

Voces: ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD - VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS - SIMULACIÓN - RECURSO DE APELACIÓN - RECHAZO DEL RECURSO - INADMISIBILIDAD - FRAUDE A TERCEROS - VOLUNTAD REAL - ACTO APARENTE - CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES - RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Partes: Aetna Chile Seguros Generales S.A. con Plummer Luna, Guillermo | Casación en el fondo

Tribunal: Corte Suprema

Fecha: 20-oct-1997

Cita: MJCH_MJJ594 | RDJ594

Producto: MJ

Doctrina: Es admisible y por lo tanto contiene peticiones concretas el recurso de apelación en el que el apelante pide que se desestime la demanda en todas sus partes. Implícitamente esté pidiendo la revocación de la sentencia. Se entiende por simulación la disconformidad consistente entre la voluntad y su declaración convenida entre partes, con el fin de engañar a terceros, siendo sus elementos los siguientes: a) disconformidad entre la voluntad real, efectiva, verdadera y la declarada o manifestada; b) conciencia de la disconformidad, esto es, conocimiento o sapiencia de que queriéndose algo se expresa algo diferente. Esta posición de los sujetos conforma la diferencia entre la simulación y el error el cual también existe disconformidad entre lo querido y lo manifestado pero falta, precisamente, esta conciencia o actitud deliberada; c) concierto entre las partes, o sea, comunicación recíproca y acuerdo entre ellos en lo que expresan es solamente apariencia porque es distinto a lo que efectivamente se quiere; d) intención de engañar a terceros. Simulación absoluta es aquella en la que tras el acto aparente no se oculta otro y por simulación relativa, la que tras el acto aparente se esconde otro diverso. El que alega la existencia de un acto simulado, debe probarla, concusión que se desprende del artículo 1698 del Código Civil. Para ejercitar una acción de simulación se necesita ser titular de un derecho subjetivo o de una posición jurídica amenazada por un contrato aparente. La causa de la simulación debe ser contemporánea del acto que se intenta impugnar, porque si las circunstancias de desarreglo patrimonial o el interés de eludir la norma de la ley sobrevienen después, no es posible retrotraerlas al principio y quedar fuera de la causalidad psicológica determinante del acto. Los jueces que resuelven en esta forma no infringen el artículo 1698 y por lo tanto debe rechazarse el recurso de casación en el fondo.

Corte de Apelaciones de Santiago, 12 de Diciembre de 1997 Wilson Almendra, Isidro P. con Gomara Reig, Delfina Corretaje (intermediación bienes raíces) Intermediación bienes raíces (corretaje) Intermediación actos de comercio (corretaje) Derecho civil (intermediación bienes raíces) DOCTRINA: El corretaje de que trata el artículo 3 N° 11 del Código de Comercio, se refiere a la intermediación en actos de comercio, de modo que la intermediación en la compraventa de bienes raíces, actos jurídicos esencialmente de naturaleza civil, se rige por la normativa del derecho civil, en virtud del principio de accesoriedad que informa nuestro derecho. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con las

siguientes modificaciones: Se eliminan los considerandos 8º, 9º, 10º, 11º y 12º de la sentencia que se revisa. En la parte que se mantiene, se reemplaza la palabra "ascendiente", que se lee en el considerando 4º, por la voz "ascendentes" la grafía "dom" por la palabra "don" en el considerando quinto; en el razonamiento sexto, acápite B, se cambia la grafía "a dem ás" por la palabra "además". En sus citas legales se eliminan los artículos 4, 45, 46 y 47 del Código de Comercio. Y se tiene presente: 1º. Que ante la negativa sustentada por la demandada en orden a haber encomendado al demandante la ejecución de las gestiones necesarias para la enajenación de los derechos que como comunera le correspondía en la Chacra El Molino de la Comuna de Renca, era de cargo del actor acreditar que intermedió en las gestiones hasta obtener la venta de esos derechos; 2º. Que es un hecho de la causa que la demandada vendió sus derechos hereditarios sobre dicho bien a la Sociedad Constructora Servinco Ltda., ya que esto no se ha discutido y, por lo demás, se acredita con la escritura pública extendida a este efecto y que en fotocopia autenticada se acompañó por el demandante; 3º. Que el solo hecho de haberse celebrado el contrato que se indicó, no prueba necesariamente que el demandante haya sido comisionado por la demandada para intermediar en dicha venta, puesto que el corretaje puede realizarse por encargo de una de las partes o bien de ambas; 4º. Que los demás documentos acompañados por el actor y que se relacionan en el considerando sexto letra A de la sentencia que se examina, tampoco constituyen prueba del citado encargo. En efecto, la carta dirigida por fax al demandante por don Edgardo Vallejos Rodríguez, por poder de Servinco Ltda., que fue la sociedad compradora, sólo se limita a poner por escrito los términos de la oferta de compra que dicha sociedad propone por intermedio del actor a la demandada; y en parte alguna de ella se consigna el hecho de que el señor Wilson se encuentre actuando por encargo de la demandada. En cuanto al fax que se dirige al actor por el estudio de abogados Hermosilla y Cía., se refiere precisamente a un proyecto de escritura de cesión de derechos hereditarios, emanado de ese estudio, que, según se ha reconocido en autos, atendía los intereses de la compradora, Sociedad Servinco Ltda.; 5º. Que el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles; las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles (artículo 1º del Código de Comercio); 6º. Que el corretaje de que trata el artículo 3º N° 11 del Código de Comercio, se refiere a la intermediación en actos de comercio, de modo que la intermediación en la compraventa de bienes raíces, actos jurídicos esencialmente de naturaleza civil, se rige por la normativa del derecho civil, en virtud del principio de accesoriedad que informa nuestro derecho; 7º. Que de acuerdo a lo razonado, la prueba tendiente a acreditar la existencia del contrato que se invoca, debe regirse por las normas del Código Civil, y en especial, los artículos 1708 y 1709 que establecen la inadmisibilidad de la prueba testifical para acreditar una obligación que, por su cuantía, debió consignarse por escrito, a menos que haya un principio de prueba por escrito de que efectivamente se haya celebrado el acto o contrato, circunstancia que no se da en la especie. Por estas consideraciones, se revoca la sentencia apelada de 29 de agosto de 1995, escrita a fojas 63 y siguientes, y se declara que se rechaza la demanda de lo principal de fojas 1, con costas. Redactó la Ministra Srta. María Antonia Morales V. Humberto Espejo Z., María Morales V., Raimundo Díaz G.

Corte de Apelaciones de Santiago, 12 de Diciembre de 1997 Wilson Almendra, Isidro P. con Gomara Reig, Delfina Corretaje (intermediación bienes raíces) Intermediación bienes raíces (corretaje) Intermediación actos de comercio (corretaje) Derecho civil (intermediación bienes raíces)
DOCTRINA: El corretaje de que trata el artículo 3º N° 11 del Código de Comercio, se refiere a la intermediación en actos de comercio, de modo que la intermediación en la compraventa de bienes raíces, actos jurídicos esencialmente de naturaleza civil, se rige por la normativa del derecho civil, en virtud del principio de accesoriedad que informa nuestro derecho. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones: Se eliminan los considerandos 8º, 9º, 10º, 11º y 12º de la sentencia que se revisa. En la parte que se mantiene, se reemplaza la palabra "ascendiente", que se lee en el considerando 4º, por la voz "ascendentes" la grafía "dom" por la palabra "don" en el considerando quinto; en el razonamiento sexto, acápite B, se cambia la grafía "a dem ás" por la palabra "además". En sus citas legales se eliminan los artículos 4, 45, 46 y 47 del Código de Comercio. Y se tiene

presente: 1°. Que ante la negativa sustentada por la demandada en orden a haber encomendado al demandante la ejecución de las gestiones necesarias para la enajenación de los derechos que como comunera le correspondía en la Chacra El Molino de la Comuna de Renca, era de cargo del actor acreditar que intermedió en las gestiones hasta obtener la venta de esos derechos; 2°. Que es un hecho de la causa que la demandada vendió sus derechos hereditarios sobre dicho bien a la Sociedad Constructora Servinco Ltda., ya que esto no se ha discutido y, por lo demás, se acredita con la escritura pública extendida a este efecto y que en fotocopia autenticada se acompañó por el demandante; 3°. Que el solo hecho de haberse celebrado el contrato que se indicó, no prueba necesariamente que el demandante haya sido comisionado por la demandada para intermediar en dicha venta, puesto que el corretaje puede realizarse por encargo de una de las partes o bien de ambas; 4°. Que los demás documentos acompañados por el actor y que se relacionan en el considerando sexto letra A de la sentencia que se examina, tampoco constituyen prueba del citado encargo. En efecto, la carta dirigida por fax al demandante por don Edgardo Vallejos Rodríguez, por poder de Servinco Ltda., que fue la sociedad compradora, sólo se limita a poner por escrito los términos de la oferta de compra que dicha sociedad propone por intermedio del actor a la demandada; y en parte alguna de ella se consigna el hecho de que el señor Wilson se encuentre actuando por encargo de la demandada. En cuanto al fax que se dirige al actor por el estudio de abogados Hermosilla y Cía., se refiere precisamente a un proyecto de escritura de cesión de derechos hereditarios, emanado de ese estudio, que, según se ha reconocido en autos, atendía los intereses de la compradora, Sociedad Servinco Ltda.; 5°. Que el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles; las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles (artículo 1° del Código de Comercio); 6°. Que el corretaje de que trata el artículo 3° N° 11 del Código de Comercio, se refiere a la intermediación en actos de comercio, de modo que la intermediación en la compraventa de bienes raíces, actos jurídicos esencialmente de naturaleza civil, se rige por la normativa del derecho civil, en virtud del principio de accesoriedad que informa nuestro derecho; 7°. Que de acuerdo a lo razonado, la prueba tendiente a acreditar la existencia del contrato que se invoca, debe regirse por las normas del Código Civil, y en especial, los artículos 1708 y 1709 que establecen la inadmisibilidad de la prueba testifical para acreditar una obligación que, por su cuantía, debió consignarse por escrito, a menos que haya un principio de prueba por escrito de que efectivamente se haya celebrado el acto o contrato, circunstancia que no se da en la especie. Por estas consideraciones, se revoca la sentencia apelada de 29 de agosto de 1995, escrita a fojas 63 y siguientes, y se declara que se rechaza la demanda de lo principal de fojas 1, con costas. Redactó la Ministro Srta. María Antonia Morales V. Humberto Espejo Z., María Morales V., Raimundo Díaz G.